

Álvarez Riascos, Karen Tatiana. Desarrollo local como herramienta de postconflicto en Colombia. *GeoGraphos*. [En línea]. Alicante: Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la Universidad de Alicante, 2 de enero de 2016, vol. 7, nº 82, p. 1-35. [ISSN: 2173-1276] [DL: A 371-2013] [DOI: 10.14198/GEOGRA2016.7.82].



<<http://web.ua.es/revista-geographos-giecryal>>

Vol. 7. Nº 82

Año 2016

DESARROLLO LOCAL COMO HERRAMIENTA DE POSTCONFLICTO EN COLOMBIA¹

Karen Tatiana Álvarez Riascos
Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial
Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante (Alicante, España)
Correo electrónico: karentalvarez90@gmail.com

Recibido: 8 de agosto de 2015. Devuelto para revisión: 28 de septiembre de 2015.

Aceptado: 2 de enero de 2016

¹ Este artículo constituye una parte básica de la investigación que la autora presentó como Trabajo de Fin de Máster (TFM) en el Máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial, impartido en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante (España) durante el curso académico 2014-2015. Este trabajo, tutelado por el Dr. José Antonio Segrelles Serrano, obtuvo la máxima calificación posible (10).

RESUMEN

Este trabajo explorará las diferentes manifestaciones del desarrollo local, a partir de iniciativas llevadas a cabo especialmente en zonas rurales colombianas e implementadas desde diferentes entes como el Estado, la ciudadanía y la Empresa privada, que han permitido la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones azotadas por el conflicto armado y han sentado la base de unos primeros pasos hacia una etapa de postconflicto en el agro colombiano y la recuperación de la cohesión social.

Palabras clave: Desarrollo local, postconflicto, Colombia, tierra, territorio.

LOCAL DEVELOPMENT AS A TOOL FOR THE POST-CONFLICT IN COLOMBIA

ABSTRACT

This paper will explore the various forms of local development, from initiatives undertaken especially in Colombian countryside and implemented from different agencies like the State, citizens and private enterprise, which has allowed the improvement in the living conditions of the stricken populations by armed conflict and have laid the foundation of the first steps toward a post-conflict phase in Colombia's countryside recovery and social cohesion.

Keywords: Local Development, Post-conflict, Colombia, Land, Territory.

DESENVOLVIMENTO LOCAL COMO INSTRUMENTO DE PÓS- CONFLITO NA COLÔMBIA

RESUMO

Este artigo irá explorar as diversas formas de desenvolvimento local, a partir de iniciativas desenvolvidas especialmente na zona rural colombiana e implementados a partir de diferentes agências como o Estado, os cidadãos e as empresas privadas, o que permitiu a melhoria das condições de vida da populações atingidas por conflitos armados e têm lançado os alicerces dos primeiros passos em direção a uma fase de pós-conflito na recuperação agrícola da Colômbia e da coesão social.

Palavras-chave: Desenvolvimento local, pós-conflito, Colômbia, terra, território.

INTRODUCCIÓN

Ante los ojos del mundo, el panorama está cambiando para el campo colombiano. A partir de los diálogos de paz con las FARC y la influencia del gobierno actual, que ha venido trabajando en una línea progresista para la formulación e implementación de nuevas políticas y programas sociales y en la creación de instituciones enfocadas al postconflicto, así como en el interés de desarrollar una política contextualizada y moderna de desarrollo rural, contando por último, con el interés de otros actores nacionales e internacionales, la ruralidad en Colombia ha vuelto a cobrar relevancia en el contexto nacional.

Se observa entonces como desde diferentes instancias se ha venido trabajando para una recuperación de las zonas rurales colombianas siguiendo diversas líneas de actuación. Sin embargo, todas coincidiendo en el impulso de un desarrollo del tipo local, primando la participación ciudadana y el empoderamiento de la población campesina.

Este trabajo explorará entonces las diferentes manifestaciones de este desarrollo de tipo local, durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2014, a partir de iniciativas llevadas a cabo en zonas rurales colombianas e implementadas desde diferentes entes como el Estado, la ciudadanía y la Empresa privada, que han permitido la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones azotadas por el conflicto armado y han sentado la base de unos primeros pasos hacia una etapa de postconflicto en el agro colombiano y la recuperación de unas condiciones de vida dignas para la población local y de la cohesión social.

Partiendo de la premisa de que uno de los orígenes históricos del conflicto armado colombiano se encuentra en las zonas rurales y agrícolas del país, específicamente por la tenencia de la tierra entre los pequeños agricultores, los grupos armados ilegales y los grandes productores del campo y la debilidad del Estado para mediar en esa problemática, se infiere que una de las soluciones estructurales al conflicto armado colombiano estaría en la redistribución de las tierras y en el desarrollo de las zonas rurales del país a partir de iniciativas participativas y equilibradas gestionadas desde diferentes entes.

En primer lugar entonces, se expondrá una breve contextualización de la situación actual del campo colombiano y del sector agrícola, dónde se identificaran las diferentes causas históricas que han configurado dicho panorama, en este caso centrándose en el conflicto armado.

A continuación, se abordará la iniciativa estatal para el desarrollo local del sector rural con miras al postconflicto, realizando un análisis crítico de los diferentes instrumentos planteados por el Estado Colombiano como la creación de entidades enfocadas en la generación de condiciones para la finalización del conflicto armado y de legislaciones que pretenden instaurar un nuevo paradigma para el campo colombiano, más específicamente se hablará del Plan de Desarrollo para los años 2010- 2014, la Ley 1418 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras y el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural.

Después se explorarán las iniciativas lideradas desde diferentes agentes del sector privado, bajo una perspectiva fundamentada en la responsabilidad social empresarial, para fomentar un desarrollo del tipo local en comunidades afectadas por el conflicto armado. Más específicamente se hablará del caso de la Fundación Semana, perteneciente a Publicaciones Semana, y su trabajo enfocado hacia la construcción de paz y la reconciliación en los

Montes de María, una región ubicada al norte de Colombia que padeció algunos de los hechos más violentos del conflicto. Apoyada por otras instituciones de carácter privado, organismos no gubernamentales, y cooperantes internacionales, la Fundación Semana trabaja por la reconstrucción tanto infraestructural como del tejido social de estas comunidades, además busca promover en ellas las condiciones necesarias para que la población se empodere y trabaje por su propio desarrollo.

Más adelante, se enfocará el análisis en las iniciativas llevadas a cabo en el suroccidente del país, una región en donde si bien se están llevando importantes iniciativas de paz todavía existe una fuerte presencia de los grupos armados ilegales. Teniendo en cuenta este contexto, se presentará una iniciativa de asociacionismo productivo liderada por la Corporación VallenPaz, fundada por miembros de la sociedad civil que decidieron aportar una solución al conflicto armado en esta zona del país. VallenPaz trabaja con pequeños productores de la región que han sido víctimas y victimarios del conflicto con la finalidad de promover la reconciliación y la mejora en las condiciones económicas de estas personas.

CONTEXTUALIZACIÓN

En la ruralidad colombiana no solo se combinan las consecuencias del conflicto armado interno entre diversos actores armados al margen de la ley y las fuerzas del Estado, que viene azotando a este país suramericano desde hace más de 50 años, sino también la profunda deuda social con el campesinado debido al abandono histórico de las instituciones, la falta de una gestión adecuada para un sector rural que se extiende por aproximadamente un 94% de la superficie del país y es el hogar de un 32% de la población (*Revista Semana*, 17/02/2012), y la eterna disputa por la tenencia de la tierra, producto de una desigualdad estructural en la concentración de ésta.

La crudeza de la violencia vivida en Colombia, específicamente en sus zonas rurales, contrasta con la singularidad de campo colombiano, caracterizado no solo por la abundancia de recursos naturales sino por la idoneidad de sus climas y su condición geográfica para el sector agropecuario, considerado como estratégico para el país, pero que aun así presenta un bajo dinamismo en su crecimiento económico y un desarrollo por debajo de su potencial: “En la última década creció en promedio un 2% frente al 4% del total de la economía, y por debajo del crecimiento promedio en las agriculturas de Argentina (7.4%), Perú (5.6%) o Chile (4.2%).” (INCODER, 2013, p. 1).

El sector agrícola colombiano ha contribuido al total del PIB del país en los últimos 5 años, según estadísticas del Banco Mundial, con un porcentaje cercano al 6.57% anual, sin embargo se evidencia un decrecimiento del peso del mismo en la economía nacional en las últimas décadas, que según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y los gremios agropecuarios responde a ciertos factores que afectan el desempeño del sector, entre los cuales están: “la falta de políticas a largo plazo, la baja capacidad técnica de la institucionalidad sectorial, el rezago en la infraestructura, los problemas de rentabilidad, la incertidumbre jurídica y el contrabando” (Diario *El Colombiano*, 13/03/2014).

A pesar de esto, el sector agrícola colombiano satisface la demanda alimentaria de la nación y provee materias primas para una gran diversidad de industrias, teniendo también una participación importante en los mercados internacionales de café, azúcar, banano y aceite

de palma (PNUD, 2009, p. 1). Además de esto, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para enero de 2015, las estadísticas de personas ocupadas según sectores económicos arrojaron que un 16% estaban empleadas en el sector agropecuario, y según los resultados del primer Censo Nacional Agropecuario, publicado en agosto de 2015, éste ocupa un total de 7 millones de hectáreas cultivadas, de las 113 millones censadas.

La producción agrícola se encuentra distribuida entre los 32 departamentos del país, con un porcentaje mayoritario de pequeños agricultores. Según el Censo Nacional Agropecuario, el 69,9% de los campesinos tienen menos de 5 hectáreas y ocupan solo el 5% del área censada, mientras que las tierras de más de 500 hectáreas pertenecen al 0,4% de los propietarios, representando el 41,1% del área censada. Esto pone en manifiesto el gran desequilibrio en la concentración de la tierra, desigualdad que ha venido creciendo año tras año: para el 2012, el Índice de Gini rural (que mide la desigualdad) había pasado de 0.74 al 0.88 en la última década, presentándose una mayor concentración de la tierra en las zonas ganaderas y en las que se explotan recursos naturales (*Revista Semana*, 17/02/2012).

A parte de la distribución y titularidad de la tierra, el campo colombiano presenta graves problemas en cuanto a los usos de la misma. El principal es tal vez el incremento de la producción ganadera en el país “a Colombia le sobra mucha ganadería: de 39,2 millones de hectáreas que hoy se usan en esa actividad, solo 21 millones son aptas para ella. En contraste, de las 21,5 millones de hectáreas de tierra con capacidad agrícola, solo se usan 4,9 millones. No obstante, una hectárea de agricultura genera 12,5 más valor que una de ganadería” (*Revista Semana*, 17/02/2012).

Además, la situación del campesino colombiano es precaria y las cifras lo demuestran: El 60% del empleo rural es de carácter informal con un ingreso promedio de 220.000 pesos (80 euros) mientras que en la ciudad el ingreso promedio alcanza los 668.000 pesos (240 euros) (para el año 2009). Esto hace que la calidad de vida sea deficiente ya que por ejemplo, el 11.5% de la población rural es analfabeta, el 11% carece vivienda y el 16% tiene una en mala estado y el 85% no tiene alcantarillado y el 60% no tiene agua potable (*Revista Semana*, 17/02/2012). El campo y el campesino colombiano viven entonces sumidos en una situación de pobreza, debido no solo a la desigualdad en la distribución de la tierra y a los conflictos alrededor de ésta, sino también a los usos de la misma y a la falta de oportunidades, al desempleo y a los conflictos sociales: “De 100 personas que viven en el campo 65 se encuentran en condiciones de vulnerabilidad” (INCODER, 2013, p. 2).

Esta histórica situación de desventaja del sector rural colombiano frente a otros, ha servido como caldo de cultivo para la violencia y ha sido un motor importante del conflicto armado interno que se vive en el país, conllevando más pobreza y más vulnerabilidad para el campo y sus habitantes.

El conflicto armado en Colombia ha sido eminentemente por el control del territorio y ha involucrado a una multiplicidad de actores, cada uno luchando por una serie de intereses que tienen como eje transversal la tenencia de la tierra. No se debe olvidar que el territorio es un activo y un factor productivo fundamental en contextos como el colombiano, en donde la ruralidad aun es importante, al ser la tierra un medio de vida con connotaciones culturales significativas en el desarrollo de las comunidades rurales.

Sin embargo, se aprecia cómo el territorio en Colombia, además de un medio de vida, ha sido un instrumento de guerra, ya que en éste se han configurado corredores estratégicos de dominación, de narcotráfico y expansión por parte de los grupos armados ilegales. Igualmente, éste ha cumplido una función de instrumento político utilizado en muchos casos a través de la violencia, tanto por el Estado como por otros agentes, al ser un medio para controlar los recursos naturales estratégicos y ejercer soberanía.

MARCO TEÓRICO

En conflictos eminentemente rurales como es el caso de Colombia, la planificación del postconflicto debe darse desde una perspectiva que incluya un desarrollo del tipo local de las poblaciones campesinas, gestionado tanto desde el Estado como desde la propia comunidad y terceros interesados. La aplicación de programas de desarrollo local dependerá, sin embargo, de la estabilidad en la que se encuentre el territorio en cuestión, por ejemplo, en el caso colombiano, el conflicto se encuentra focalizado en determinadas zonas del país, pero en gran parte del territorio rural hay establecidas condiciones de seguridad, lo que ha permitido algún avance en la recuperación económica local y en la planificación de un desarrollo local.

El desarrollo local plantea “que las capacidades emprendedoras locales pueden ser activadas y dinamizadas para valorizar los recursos productivos tradicionales (agricultura, artesanado, pequeña y mediana industria) y no tradicionales (energías renovables, protección del medio ambiente, cuidado y/o valorización del patrimonio cultural local, turismo) generando nuevas actividades productivas y empleos” (Rosales y Urriola, 2011, p. 3). En un escenario de postconflicto el desarrollo local surge como una opción complementaria a las políticas de paz a escala nacional, para recuperar el territorio y a sus pobladores mediante la planificación del territorio.

El desarrollo local puede ayudar a activar nuevos mecanismos de desarrollo que contribuyan a la reducción de la pobreza, no solo con los propios recursos locales sino también aprovechando y canalizando capital y apoyos provenientes de fuera del territorio, permitiendo que la economía local se integre a un nivel regional y nacional (Rosales y Urriola, 2011, p. 4).

Se hace imprescindible destacar que, en contextos de guerra, la cohesión social se encuentra debilitada por lo que el desarrollo local debe orientarse a reducir las brechas sociales, incrementar la integración productiva, mediante la creación de empleos a través de iniciativas productivas, y fortalecer la institucionalidad local (Rosales y Urriola, 2011, p. 2), esto con el propósito de asegurar el bienestar de todos los miembros de la sociedad y evitar las polarizaciones que puedan llevar a nuevos conflictos.

Además, el desarrollo local es un enfoque idóneo para el mantenimiento de la paz en la medida en la que “puede contribuir a reducir el riesgo de recurrencia abordando ciertos factores de riesgo como, por ejemplo, las desigualdades entre grupos que surgen al no tener el mismo acceso a las oportunidades económicas y a la distribución de recursos, la pobre

participación y polarización en la toma de decisiones, y el desempleo entre los jóvenes” (OIT, 2010, p. 48).

A continuación, se abordarán las diferentes estrategias que desde una perspectiva del desarrollo local se pueden llevar a cabo en un territorio dentro del marco de un proceso de postconflicto. Después, se introducirán diferentes estrategias de desarrollo local que se pueden implementar en situaciones de finalización del conflicto, las cuales se desarrollaran más a fondo con casos ilustrativos en los siguientes apartados: la recuperación económica local, la responsabilidad social empresarial, y la participación de la sociedad civil.

Recuperación económica local

Para hablar de desarrollo local dentro de un proceso de postconflicto deben primero garantizarse unas condiciones previas que le permitirán a la comunidad objeto empoderarse de su propio proceso de desarrollo. Es por esto que una vez finalizada la confrontación armada, la estrategia que debe seguirse es la de recuperar ciertas condiciones locales con el propósito de mejorar la economía de la zona y la cohesión social.

Este primer enfoque de recuperación económica local promueve el uso de los activos y las fortalezas locales, facilitando, entre otras, la participación ciudadana, el uso de mano de obra de la propia comunidad y la adquisición local de bienes y servicios, lo que facilita la reconciliación dentro de las poblaciones afectadas y la autosuficiencia de los grupos afectados por el conflicto (OIT, 2010, p. 14).

Se debe recordar que después de varios años de conflicto, las economías locales a menudo se encuentran estancadas y no pueden procurarse unas condiciones propias para establecer su autodesarrollo. Esto se debe principalmente al reducido poder adquisitivo de la población, a la interrupción de circuitos comerciales, a la pérdida de activos productivos, a las carencias en infraestructuras, a la falta de capacitación de la mano de obra, a los riesgos de invertir en contextos de inestabilidad y al clima general de desconfianza que reina entre la propia población (OIT, 2010, p. 1).

A corto plazo entonces, el objetivo de las estrategias de recuperación económica local está encaminado a reducir gradualmente la dependencia de la ayuda externa, mediante la puesta en marcha de actividades a pequeña escala que tienen como propósito recuperar ciertas condiciones de subsistencia, para después en un largo plazo establecer unas endógenas que permitan reactivar las economías locales y crear nuevas oportunidades de trabajo.

En general, la recuperación económica local se aplica en contextos en donde las instituciones locales son débiles, el crecimiento económico es lento y la independencia de la comunidad es mínima. En escenarios con estas características, la planificación y puesta en marcha de esta estrategia estarán dirigidas por otros entes, ya sea el Estado o un tercero interesado. Sin embargo, la expectativa es que cuando las autoridades locales vean su capacidad restablecida, desempeñen un papel más activo dentro del marco de las iniciativas de recuperación en el establecimiento de prioridades, la movilización de los recursos, en la

supervisión de las iniciativas sobre el terreno, y en el alineamiento entre las estrategias tanto nacionales como locales de desarrollo (OIT, 2010, p. 32).

Con el fin de garantizar el éxito de la recuperación económica, la participación local en la toma de decisiones debe convertirse en una condición fundamental, por lo que durante su aplicación los encargados deben movilizar a las partes locales e involucrarlas gradualmente en la toma de decisiones y en la puesta en marcha de los planes e iniciativas. Además, las acciones de recuperación económica local se deben basar en la evaluación realizada de la situación inmediata después del conflicto y en los recursos territoriales y las oportunidades de empleo y generación de ingresos locales (OIT, 2010, p. 6).

Esto último resalta el enfoque territorial que tienen las iniciativas de recuperación económica local encaminadas a establecer condiciones para el desarrollo local de las comunidades tanto rurales como urbanas. “En comparación con enfoques que se centran en grupos específicos, esta idea de utilizar el área geográfica como punto de mira permite tener en cuenta una zona económica local más amplia y hacer un mejor uso de los recursos locales y de las inversiones externas” (OIT, 2010, p. 22).

Responsabilidad social empresarial y desarrollo local para el postconflicto

La construcción de una paz duradera y sostenible requiere de la participación de muchos más actores de la sociedad, aparte del Estado. El papel de las entidades privadas y otros interesados como aliados de los procesos de postconflicto, y en algunos casos como protagonistas de los mismos, ha garantizado la viabilidad tanto financiera como política y estructural de los mismos.

Las diferentes experiencias de construcción de paz han tendido a dotar de una mayor importancia a la contribución, tanto financiera como técnica, de los cooperantes internacionales como de los programas de ayuda estatales para la reconstrucción económica y social de un país. Sin embargo, cada vez es más valorado y necesitado el aporte de la empresa privada local, incluso por encima de la ayuda internacional, la cual es de carácter transitorio en la mayoría de los casos.

En este sentido, la constitución de alianzas público-privadas, las cuales son acuerdos voluntarios y de colaboración entre entidades de diferentes sectores en los que éstos coordinan esfuerzos para alcanzar un objetivo en concreto, compartiendo responsabilidades, riesgos y recursos, son una herramienta “decisiva para iniciativas que precisan soluciones basadas en el desarrollo de las capacidades locales mediante un apoyo puntual externo como en el caso de la reconstrucción posbélica” (Prandi, 2010, p. 41). Esto es posible gracias a la disposición de los actores de compartir conocimientos, experiencias y recursos.

Además, en contextos como el colombiano en donde la corrupción es una problemática añadida a la del conflicto armado, la eficiencia y calidad de los servicios prestados por el Estado se ve seriamente cuestionada. La colaboración con una entidad privada u organización permitirá que este obstáculo pueda superarse, ya que éstos asumirían una gran parte de los riesgos financieros, técnicos y operacionales, garantizando así la prestación de

ciertos servicios y la consecución de los objetivos de desarrollo propuestos, especialmente en las regiones más apartadas y en zonas rurales.

Es importante tener en cuenta también que la empresa privada tiene la capacidad de generar desarrollo y crecimiento económico en contextos de reconstrucción postconflicto mediante la creación de empleo, siendo esto de gran importancia para el asentamiento de la paz y la sustitución de la economía ilegal predominante durante la guerra. La incorporación a la empresa de personas en situación de vulnerabilidad debido al conflicto no solo responde a criterios morales, sino también a la capacidad que tiene esa persona de potenciar el trabajo de la empresa gracias a las habilidades que desarrolló antes o durante el conflicto (como puede ser el caso de los desmovilizados de los grupos armados) (Prandi, 2010, p. 51).

A parte del importante beneficio económico que significa el apoyo de la empresa privada para las comunidades después del conflicto, ésta además puede llevar a cabo una variedad de acciones igualmente significativas como servir de conector entre la población y el Estado, participar activamente en las negociaciones de paz, gestionar la entrega de ayuda humanitaria, reforzar el emprendimiento, generar confianza dentro de la comunidad, entre otras.

Otra habilidad importante de la empresa privada en el marco de un proceso de postconflicto es que puede reorientar su política de responsabilidad social empresarial hacia la consolidación de la paz, por ejemplo, mediante el impulso de la actividad económica local, o por medio de iniciativas que tengan como objeto la superación de la exclusión social producto del conflicto, la reconciliación entre las diferentes partes de la confrontación o la reconstrucción de la cohesión comunitaria. “Así pues, en contextos de postconflicto se da la necesidad de incorporar en las políticas de RSE criterios de lucha contra la pobreza y de reconstrucción física pero también de contribución a la superación de las fracturas sociales desde una perspectiva de transparencia y equidad” (Prandi, 2010, p. 39).

En resumen, la implicación del sector privado en la construcción de paz ayuda a la planificación de iniciativas de postconflicto, ya sea en compañía del Estado y otras organizaciones o en ausencia de éstos, a través de financiación o capacidad técnica, y además, aportando liderazgo y capacidad de gestión en los proyectos planteados dentro de una alianza público-privada. Igualmente, al ser el sector privado un actor aparentemente neutral, puede facilitar su acercamiento con las comunidades locales, lo cual sumado a sus capacidades económicas, técnicas y logísticas puede significar mucho para un proceso de desarrollo local.

Desarrollo local y Sociedad Civil

Un proceso de paz es sostenible solo si es apropiado para la población. La construcción de paz debe partir y arraigarse en el mismo territorio en el que el conflicto se desarrolló y esto solo se logrará con la participación de los protagonistas y las víctimas de la violencia en cada región y localidad del conflicto. La participación de la sociedad civil en la configuración de escenarios de postconflicto, especialmente en contextos rurales como el colombiano, tiene un papel preponderante para la viabilidad de las iniciativas planteadas.

La sociedad civil “ha abierto una vía regional para la paz en el país, a partir de procesos sociales a nivel micro, que han descentralizado la construcción de paz en Colombia” (Barreto Henriques, 2009, p. 559). Esto es fundamental para estructurar un proceso de construcción de paz integral ya que una política o proceso de paz que no tenga en cuenta la variable territorial y las particularidades regionales está destinada a fracasar o a obtener impactos limitados. El postconflicto no puede basarse en un enfoque estrictamente nacional, debe tener en cuenta una escala local, involucrando a las regiones, a las comunidades y a la sociedad civil organizada, de forma que se pueda mitigar las expresiones violentas y consolidar las dinámicas de resolución pacífica de conflictos, cultura de paz, inclusión social, política y económica.

Las iniciativas de la sociedad civil se desarrollan bajo mecanismos y procesos que permiten la participación ciudadana a nivel regional y local y el fortalecimiento institucional. Se observa como en el caso colombiano, por ejemplo, se han puesto en marcha diversos procesos de fomento de una democracia participativa con la finalidad de acercar a los ciudadanos a las instituciones, y fomentar un nuevo paradigma en la relación entre gobernantes y gobernados, mediante la articulación entre el sector público y privado, y entre la sociedad civil y los entes gubernamentales, a través de programas de rendición de cuentas y presupuestos y mecanismos de planificación participativos.

El enfoque de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil permite entonces integrar a los territorios y sectores sociales históricamente marginados de las instituciones y el desarrollo. La planificación de un desarrollo local por parte de la sociedad civil tiene en cuenta aspectos como el fortalecimiento de una cultura democrática ayudando a llenar el profundo vacío institucional, así como la instauración de unas condiciones de bienestar a partir de la ampliación de las infraestructuras públicas de bienes y servicios, claves para la consolidación de paz y la disminución de la brecha entre las grandes capitales y las periferias nacionales.

DESARROLLO LOCAL PARA EL POSTCONFLICTO: UNA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO COLOMBIANO

Colombia representa un caso muy particular: es el único país del mundo en donde se han implementado estrategias de postconflicto en medio de la confrontación armada y sin haber finalizado las negociaciones de paz. Desde el gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos se han venido llevando a cabo una serie de medidas que tienen como propósito superar las consecuencias de más de 50 años de conflicto armado, las cuales van desde la creación de dependencias enfocadas en la atención integral a las víctimas, la restitución de las tierras despojadas, la superación de la pobreza extrema, la desmovilización y reintegración de excombatientes de los grupos armados ilegales, entre otras, a la construcción de un complejo Plan Nacional de Desarrollo, ruta a seguir desde el gobierno actual, enfocado en la consolidación de la paz y el desarrollo de las regiones, especialmente aquellas más afectadas por el conflicto armado.

La realidad social y economía de una parte importante de la población campesina y rural colombiana está marcada por la desigualdad y la pobreza: Más del 60% de los hogares rurales viven en condiciones de pobreza o de pobreza extrema (Más del 30%), además sin

contar con el acceso a servicios de calidad (Consortio Asistencia Técnica Internacional del Tercer Laboratorio de Paz, 2011, p. 6).

A pesar de que estos factores han sido determinantes para la proliferación del conflicto armado en Colombia, resulta contradictorio que el desarrollo rural y el acceso, tenencia, distribución y uso de la tierra no hayan tenido un papel significativo en la agenda política nacional de las últimas décadas.

Sin embargo, con el actual Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional se evidencia la intención de generar un cambio en el campo colombiano, mediante el impulso al desarrollo rural y el reconocimiento del papel estratégico de sector agropecuario en la economía del país.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 (PND) fue el instrumento del primer periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el que se dictaron una serie de directrices bajo las cuales se debían constituir las diferentes intervenciones gubernamentales en el territorio colombiano. El objetivo del PND era entonces marcar los lineamientos para el crecimiento y mejoramiento del país, determinando los procesos que se debían llevar a cabo para cumplir con las metas propuestas durante los años venideros.

Los objetivos planteados en el PND parecían en una primera instancia acercar a Colombia hacia una situación donde se facilitase la recuperación económica local de las regiones en una coyuntura en donde el conflicto armado se encontraba des-escalándose y focalizándose en puntos estratégicos de la geografía nacional, pero que sin embargo, permitían implementar programas y medidas a corto y mediano plazo para elevar el nivel de vida de las poblaciones que se encontraban en desventaja. En concordancia con la perspectiva de postconflicto en las políticas nacionales, son los objetivos de convergencia regional y consolidación de paz planteados en el PND, los más enfocados en lograr este propósito.

En cuanto al objetivo de convergencia regional, uno de los mayores desafíos definidos por el gobierno Santos ha sido “lograr niveles de crecimiento y desarrollo socioeconómico sostenible y convergente, reconociendo y aprovechando las diferentes capacidades económicas, sociales, institucionales e iniciativas de desarrollo regional” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 27). Con este objetivo en mente el PND se constituyó con un enfoque regional partiendo del reconocimiento de las diferencias departamentales² como marco de referencia para la formulación de políticas públicas y programas que fuesen consecuentes con las realidades y capacidades de cada departamento y con las particularidades de sus grupos poblacionales.

Por otra parte y según el PND “Consolidar la paz significa garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. La prevalencia del Estado de Derecho es la consolidación de la seguridad en todo el territorio nacional, la observancia plena de los derechos humanos, y el funcionamiento eficaz de la justicia” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 499). Sin embargo, la consolidación de paz no solo se plantea en términos de seguridad y en el mantenimiento del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. En el PND

² Colombia se encuentra dividida en cinco grandes regiones naturales, cada una representando una diversidad de climas y relieves y de condiciones socioeconómicas y culturales: Región Andina, Región Caribe, Región Pacífica, Región de la Amazonia y Región de la Orinoquia. Cada una de estas regiones está conformada por departamentos con características diferentes, siendo en total 32 a nivel nacional.

se introdujo una nueva dimensión que implica la consolidación del territorio como garantía de paz.

Como complemento del Plan Nacional de Desarrollo y con el fin de abordar las causas que determinan y reproducen la pobreza de la población desplazada, eminentemente campesina, el Gobierno colombiano ha armado una política de Tierras y de Desarrollo Rural que se ha estructurado en tres grandes componentes: restitución de tierras, formalización de la propiedad y desarrollo rural, los cuales están cimentados en dos leyes fundamentales: la Ley 1448 de 2011 de Reparación Integral a las Víctimas y la Ley de Desarrollo Rural que se encuentra en espera de aprobación.

Cabe también resaltar que la con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con la futura Ley de Tierras y Desarrollo Rural, el Estado ha empezado a asumir su responsabilidad frente a las repercusiones del conflicto armado en la población rural.

Las actuaciones del Gobierno actual pueden catalogarse entonces como acciones de recuperación económica local en la medida en la que trabajan por la reintegración socioeconómica de las comunidades víctimas del conflicto armado, especialmente en las zonas rurales más alejadas, mediante la generación de capacidades económicas locales, el afianzamiento de la cohesión social, el refuerzo de la presencia institucional y la participación ciudadana.

La planificación desde el Estado central de políticas de desarrollo local rural como una herramienta para la superación del conflicto armado ha tenido en cuenta que el campo colombiano “está conformado por una multiplicidad de identidades, culturas, organizaciones productivas, modalidades de relación con el mercado y niveles de ingreso y bienestar” (Consortio Asistencia Técnica Internacional del Tercer Laboratorio de Paz, 2011, p. 13), evidenciable en la medida en la que la gran mayoría de las iniciativas anteriormente mencionadas tienen en cuenta enfoques de aplicación diferenciales, con énfasis especial en las mujeres y en la población indígena y afrocolombiana, históricamente marginadas.

Ejemplo de esto es la sentencia histórica, de julio de 2015, con la que se restituyeron 71 mil hectáreas colectivas a 10 comunidades afrocolombianas asentadas en Timbiquí, departamento del Cauca. La sentencia no solo es histórica al ser una de las primeras que protege los derechos de una comunidad étnica y la primera en darle razón a una comunidad afro, sino que también formaliza la actividad minera de carácter ancestral de estas comunidades y exige suspender los títulos y concesiones mineras legales otorgadas que afecten o se traslapen con el territorio colectivo (*Verdad Abierta*, 06/07/2015).

Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones con las que están planteados, los planes y políticas mencionados no han dado en todos los casos los resultados esperados: los objetivos del PND todavía están lejos de cumplirse en su totalidad y las primeras experiencias en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras han evidenciado la complejidad de un proceso de esta magnitud.

El PND diseñado para el primer periodo de gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y con planes de continuarse en el actual, es un proyecto de desarrollo ambicioso con metas aparentemente convergentes, aun así cabe preguntarse qué tan compatibles entre sí eran los objetivos de austeridad presupuestal (una de las estrategias

para mejorar la competitividad), con el gasto de \$80 billones de pesos calculado para la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras y con las inversiones en infraestructura por \$100 billones, tan necesarias para alcanzar el desarrollo regional que busca el gobierno actual.

Sin embargo, este no es el único cuello de botella detectado en esta propuesta de desarrollo, otro ejemplo es que a pesar de que el sector agrícola en Colombia es promovido como fundamental para el crecimiento económico y la consolidación de la paz en zonas rurales, en la realidad éste sigue siendo escasamente competitivo, tanto por el alto costo de las materias primas, producto de protecciones fiscales y costos de transporte, como por la falta de mano de obra calificada. Esto es un obstáculo importante para garantizar el desarrollo de las comunidades rurales en el posconflicto, basado en actividades económicas legales y sustentables.

Aunque este sector ha tenido una recuperación importante en los últimos años, así mismo lo han hecho las movilizaciones campesinas, especialmente durante el año 2013, organizadas por diferentes grupos de productores inconformes con la política agrícola actual y con la finalidad de que se les permitiera participar más en el proceso de formulación de la política de desarrollo rural. A raíz de las manifestaciones que se dieron a nivel nacional, se instaló el Pacto Nacional Agrario, un proceso de construcción y de consenso en donde los agricultores tuviesen voz y voto en el desarrollo de las políticas para el progreso de los territorios rurales.

Por otra parte, la política pública de consolidación territorial, que propende por el fortalecimiento de la paz mediante la instauración de unas condiciones de desarrollo local a nivel regional, especialmente en aquellas zonas que son foco del conflicto armado, ha tenido unos buenos resultados en materia de inclusión social y reconciliación. Durante los últimos 4 años esta política ha generado acciones para la integración de las regiones rurales periféricas a la vida social, económica, cultural y política de la nación central por medio del establecimiento de oportunidades para que estas poblaciones vivan en condiciones de igualdad.

Si bien esta política ha tenido consecuencias positivas, falta mucho camino por recorrer ya que los índices de desigualdad en vez de disminuir han tendido a aumentar, por lo que se necesita una acción más eficaz por parte del Estado para llevar soluciones que de verdad tengan un amplio impacto en la población que más lo necesita. Además, y aunque los índices de violencia han disminuido exponencialmente en los últimos años³, otras formas de criminalidad han surgido que amenazan la estabilidad conseguida con los esfuerzos del gobierno y otros actores.

Sin embargo, una de las mayores falencias del Estado Colombiano para asegurar la equidad y el desarrollo incluyente de las zonas periféricas, es la debilidad, falta de modernización y autonomía de sus instituciones locales y la corrupción que reina en éstas a la hora de la distribución de los recursos. Si el Estado no enfrenta eficazmente esta debilidad, las

³ Según las estadísticas del Ministerio de Defensa, el 74% de los municipios del país al año 2013 no tenían presencia de grupos terroristas ni de bandas criminales (Bacrim). Se resalta además, que en el 93% de los municipios no hubo acciones subversivas durante el último año, el 84% no tiene presencia de Bacrim y el 88% no tuvo atentados terroristas por parte de las FARC o ELN (Departamento Nacional de Planeación, 2014:99).

probabilidades de asegurar un desarrollo local para los territorios rurales de la nación serán escasas.

Por otra parte, la política de restitución de tierras que se encuentra en su etapa de desarrollo y fortalecimiento institucional, ha dado unos resultados de ejecución más bien ambiguos: “al finalizar 2013, el 80,3% de las solicitudes (43.409) se encontraba en zonas macrofocalizadas y de esas solo el 38% (16.351) se encontraba en zona microfocalizada, es decir que únicamente sobre este porcentaje de solicitudes se podía adelantar todo el proceso administrativo” (Departamento Nacional de Planeación, 2014, p. 93), infiriéndose entonces que a pesar de que la política de restitución de tierras tuvo una demanda amplia en términos de solicitudes, ésta no ha logrado los resultados esperados.

Otras de las problemáticas que se han descubierto en la implementación de esta política según una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación en el año 2013 son el riesgo de desfinanciamiento del programa debido a errores en el cálculo del presupuesto; se evidencian también un exceso de trámites burocráticos que deben llevar a cabo las víctimas para acceder al proceso de restitución, lo cual vulnera aún más a esta población; además, las entidades involucradas en la ejecución de esta política se encuentra poco coordinadas, lo que genera solapamientos y desgaste institucional; un último problema en la ejecución ha sido el bajo nivel de acceso a la justicia para las mujeres y comunidades étnicas, manifestando algunos posibles errores que tiene la implementación del enfoque diferencial.

Se ha identificado también que existe un riesgo importante en adelantar este proceso en medio del conflicto, ya que son muchos los intereses que están en juego. Los informes sobre amenazas y actos violentos en contra de líderes locales de restitución de tierras han sido un freno para las comunidades ya que esto ha minado su capacidad y voluntad organizativa para acceder al proceso. La seguridad es entonces una temática que debe abordarse con mayor responsabilidad por las entidades correspondientes para procurar la confianza de las víctimas en el proceso y la sostenibilidad del retorno.

El tema de la seguridad, se une a la falta de infraestructuras básicas a nivel local, al mal estado de las vías de comunicación, a la carencia de una vivienda digna, entre otras, que afectan en su mayoría a los territorios que son objeto de restitución, lo cual impide que las víctimas puedan retornar, problemáticas que si bien están identificadas aún no han podido resolverse ya que la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, encargada de ello, no ha sido aprobada todavía.

Para finalizar es importante mencionar que el Estado colombiano está enfocado en asegurar la paz en las regiones y territorios rurales que más la necesitan poniendo en marcha un complejo aparato de leyes y políticas públicas para tal fin, así como asegurándose el respaldo de numerosos actores como la empresa privada, la sociedad civil y la cooperación internacional, sin embargo el camino es largo y las primeras dificultades han empezado a aparecer. De la respuesta que dé el Estado a estas problemáticas dependerá entonces la superación total del conflicto armado y de sus causas estructurales así como la consecución de la paz.

DESARROLLO LOCAL EN EL POSTCONFLICTO DESDE LA INICIATIVA PRIVADA: PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL CORREGIMIENTO EL SALADO

El sector empresarial en Colombia no ha sido ajeno al conflicto armado, y su participación en el mismo ha sido desde diferentes ángulos: como víctima, como agente de construcción de paz, e incluso en algunos casos, como causante del conflicto. Las actividades de la empresa pueden ser entonces claves tanto para la superación del conflicto armado y la construcción de una paz sostenible, como para mantener o incluso empeorar la confrontación.

Con el propósito de contribuir a la construcción de la paz, el sector privado debe tener en cuenta sus capacidades, habilidades y recursos, así como su relación con el territorio y las dinámicas particulares de sus habitantes (ANDI, NIR y FIP, 2014, p. 25). Esto es de especial importancia ya que la empresa no debe ser ajena al contexto en el que opera, no solo para minimizar los riesgos, sino también para identificar qué elementos puede aportar que sirvan a sus intereses y a la consolidación de paz en su zona de actuación (Prandi, 2010, p. 18).

La empresa privada está en la capacidad de generar desarrollo y crecimiento económico, hecho de especial importancia en contextos de postconflicto, dado que la sustitución de una economía basada en la guerra es un factor relevante para el establecimiento de unas condiciones de paz que perduren en el tiempo. Sin embargo, la incidencia de la empresa en la consolidación de paz, dentro de una estrategia de responsabilidad social empresarial, también puede implicar el apoyo a la reconstrucción de infraestructuras básicas y el liderazgo de iniciativas de reconciliación, justicia y recuperación del proyecto de vida de las víctimas e incluso de los propios victimarios, una vez finalizado el conflicto.

La inclusión de la construcción de paz en las políticas de responsabilidad social empresarial propicia la formación de alianzas para la consecución de los objetivos. En este sentido, la mayoría de las acciones llevadas a cabo actualmente en Colombia desde la empresa privada para la consolidación de la paz son el fruto de la colaboración entre éstas y diferentes fundaciones, entes públicos a diferentes niveles, organizaciones del tercer sector y organismos multilaterales. “La experiencia parece indicar que este tipo de estructura, en el que la combinación de financiación y know-how implica a una multitud de actores nacionales e internacionales, es el más indicado para estos contextos” (Prandi, 2010, p. 41).

A pesar de que es persistente la concepción de la empresa como solamente un proveedor de productos o servicios, desde el Estado colombiano y la sociedad civil se les viene otorgando un papel más importante como constructoras de paz. Un ejemplo de esto es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual en su Artículo 33 reconoce e incentiva la labor del sector privado en la materialización de los derechos de las víctimas y en la reconciliación nacional.

Cada vez es más aceptada y deseada entonces la participación en el proceso de postconflicto de los *peace entrepreneurs* (empresarios/emprendedores de paz) concepto empleado para describir a miembros del sector empresarial que activamente trabajan en iniciativas que buscan promover la paz (Banfield, Jessica, Canan Gündüüz y Nick Killick, 2006, p. 2). Actualmente en Colombia existe una multiplicidad de apuestas gestadas por estos actores que incluyen iniciativas enfocadas en mejorar la calidad de vida de poblaciones afectadas por el conflicto o en riesgo de estarlo, en la reintegración socioeconómica de excombatientes de las guerrillas, en la promoción del desarrollo y la paz a nivel local, en el apoyo a personas en condición de desplazamiento forzado y, como se

verá a continuación con el caso de El Salado, en la reconstrucción de comunidades afectadas por el conflicto.

El Salado: de la destrucción a la reconstrucción

El 16 de febrero de 2001 en este corregimiento⁴ del municipio del Carmen de Bolívar, en la región de los Montes de María, al norte de Colombia, ocurrió quizás uno de los actos más bárbaros del conflicto armado en los últimos años: el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) masacró durante cinco días un total de 60 personas. Esta masacre, unida con anteriores hechos violentos ocurridos⁵, llevaron al desplazamiento de aproximadamente 4000 personas en los días posteriores, dejando en total abandono a este remoto territorio enclavado en las montañas.

A 14 años de la masacre, y después de la desmovilización de los paramilitares, la diseminación de los grupos guerrilleros y un mayor control de la seguridad por parte del Estado, cerca de 800 personas han retornado a El Salado. Aquellos que han decidido regresar, apoyadas por una multiplicidad de actores entre los que destaca Fundación Semana, han vuelto a conformar una comunidad organizada y han empezado a trabajar en la generación de condiciones para su propio desarrollo.

Fundación Semana y el Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado

Fundación Semana fue constituida en el año 2009 por Publicaciones Semana, empresa de medios de comunicación dueña de algunas de las revistas de actualidad más importantes de Colombia, con el propósito de gestionar la política de responsabilidad social de la empresa. Dicha política está enfocada en temas de inclusión social orientada a poblaciones involucradas en el conflicto armado como víctimas, desmovilizados y desplazados.

De acuerdo a esto la Fundación empezó un trabajo de identificación de posibles comunidades beneficiarias para implementar un diseño de reconstrucción integral, y con este objetivo en mente y dadas las características de El Salado se seleccionó a este corregimiento como primer foco de intervención.

El Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado nace entonces como una propuesta desde el sector privado, que ha logrado aglutinar y combinar esfuerzos de importantes organizaciones, conformando una alianza público-privada de más de 70 instituciones con el propósito de generar un modelo de intervención integral para la recuperación de este corregimiento, que pueda ser replicado en otras comunidades y contextos (Arboleda, Cajiao, Rettberg y Rivas, 2011, p. 82).

⁴ Un corregimiento es una subdivisión del área rural de un municipio, el cual incluye un núcleo de población. Está a su vez subdividido en veredas.

⁵ Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001, y sólo en la región de los Montes de María, se registraron 42 masacres con un total de 354 víctimas fatales, en su gran mayoría acometidas por los grupos paramilitares que se disputaban el control del territorio.

Este programa tiene como objetivo buscar el acompañamiento y la intervención en proyectos sociales y económicos mediante la articulación de los esfuerzos del Estado, el Sector Empresarial y otras organizaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población víctima del conflicto armado. El planteamiento de la misma está basado en un enfoque reactivo, ya que busca solucionar problemas inmediatos o de corto y mediano alcance que impiden a la comunidad desarrollar sus propias capacidades económicas y sociales.

La iniciativa está estructurada de tal forma que cada actor involucrado aporte sus capacidades y fortalezas, como recursos, experiencias y conocimientos, en el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura, educación, salud, generación de ingresos y reactivación económica, desarrollo comunitario y seguridad. La meta final es que cada uno de los proyectos llevados a cabo dé una solución a los problemas y necesidades que afectan a esta comunidad y que dichas soluciones sean sostenibles una vez el programa haya terminado.

Fundación Semana financia el programa en gran medida gracias al aporte de otras empresas, sin embargo, Publicaciones Semana también aporta capital a esta iniciativa. Además, reciben fondos de Organismos Multilaterales y de cooperación internacional, así como donaciones de cualquier persona o institución.

La experiencia de Fundación Semana es un referente para la participación de la empresa privada en la generación de escenarios de postconflicto replicables una vez que Colombia cuente con las condiciones de seguridad deseadas para tal fin. Los importantes resultados de esta iniciativa, así como la legitimidad con la que cuenta el programa a nivel local, basada en una metodología totalmente participativa, son un ejemplo de reparación para las comunidades más golpeadas por el conflicto armado y un instrumento para generar las condiciones que les permitan agenciar su propio desarrollo.

La experiencia ha sido tan positiva que actualmente, y gracias al fortalecimiento de la alianza público-privada constituida, la Fundación Semana ha ampliado su actuación al resto de municipios de los Montes de María, igualmente afectados por la guerra, y a San Basilio de Palenque, corregimiento con una comunidad afrodescendiente importante y patrimonio inmaterial de la humanidad, pero a la vez uno de los más pobres del país. Adicionalmente, se encuentra implementándose un proyecto financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo que tiene como finalidad garantizar que al menos 1.500 familias generen ingresos económicos suficientes para superar la pobreza extrema.

Quizás la sostenibilidad del proyecto así como el gran impacto del mismo puede atribuírsele en parte también al éxito que ha tenido Fundación Semana al hacerse con el apoyo incondicional de los altos mandos de las diferentes empresas colaboradoras, garantizando así un flujo permanente de recursos.

Si bien la empresa privada ha sido la gestora de la recuperación de El Salado también puede ser la que ponga un freno a su desarrollo: con las grandes reformas planteadas por el gobierno nacional, así como el desescalamiento del conflicto en la región, lo que está en juego ahora es el modelo de desarrollo rural que se implementará en el postconflicto, y si

éste primará los intereses de la economía campesina, por encima de los de la agroindustria de la madera, la palma y la ganadería extensiva, así como de la industria minera, presentes en la región.

Hoy El Salado y en general los Montes de María están viviendo una transición hacia la modernidad. Físicamente tienen una infraestructura básica en continuo mejoramiento así como avances importantes en materia de productividad, salud, educación, cultura y reconciliación, sin embargo, faltan garantías por parte del Estado para que, una vez el proyecto haya terminado, este provea efectivamente de estos bienes y servicios a estos territorios rurales.

A pesar de que el esquema de trabajo coordinado de la empresa privada ha logrado articularse con los diferentes planes de desarrollo local, así como con los gobiernos regionales, la ejecución de los proyectos se ha encontrado algunas veces con el muro infranqueable de la burocracia colombiana.

Quizá uno de los peores y más persistentes problemas de estas comunidades es la falta de ingresos, lo cual está ligado al pobre acceso a la tierra, al crédito, al mercado y a todas las dimensiones de la palabra productividad. A pesar de que en este tema se ha mejorado mucho, gracias en parte a la aplicación de los instrumentos de política pública mencionados en el anterior capítulo, las tierras adjudicadas a campesinos de El Salado hace ya algún tiempo, no han podido ser utilizadas debido a problemas en la firma de las escrituras, lo cual es sin duda preocupante ya que puede conllevar a que la comunidad pierda la fe en el proceso y se desentienda de éste.

El desempeño algo incipiente de los proyectos de desarrollo económico del programa es tal vez una consecuencia de la excesiva confianza puesta en la eficacia del gobierno a la hora de aplicar sus propias políticas. La situación de tenencia de tierras en El Salado es preocupante ya que solo el 17% de los campesinos trabajan en tierra propia, y se esperaba a que el proceso de Restitución cambiase esto, sin embargo el panorama es difícil ya que se tiene constancia que inversionistas foráneos adquirieron masivamente predios a precios irrisorios a personas en situación de desplazamiento. A pesar de esto Fundación Semana ha sido capaz de poner en marcha pequeños proyectos productivos para elevar los ingresos de las familias.

Además, y quizá la mayor preocupación de Fundación Semana, es la carretera que comunica al corregimiento con la cabecera municipal y la costa, principal motor económico de la comunidad, la cual se encontraba en pésimas condiciones y amenazaba con dejar incomunicado a El Salado. Inexplicablemente, han existido recursos para su acondicionamiento y algunos trabajos de reparación se han hecho, sin embargo la carretera no parece mejorar. La comunidad afirma que la culpa es de una empresa explotadora de petróleo y gas, que con su maquinaria pesada, destroza la vía cada vez que transita por ahí.

En áreas como la salud se evidencia también la enorme dificultad del Estado para atender las necesidades básicas de la población rural. Ejemplo de esto es que El Salado a pesar de contar con un moderno centro de salud, construido con fondos de un cooperante internacional, no pudo ser utilizado durante todo un año, ya que el gobierno local no

nombró a ningún médico que atendiese a la comunidad. Esto evidencia una vez más los grandes problemas de gobernabilidad a nivel local que posee el país.

Se concluye entonces que los esfuerzos del sector privado como actor clave en la superación del conflicto armado y en la construcción de una paz sostenible deben ser reconocidos, así como su trabajo para consolidarse como un puente entre los territorios y la institucionalidad local, regional y nacional. El trabajo de Fundación Semana en El Salado y los Montes de María ha logrado consolidar sinergias y alianzas que han potenciado las condiciones para un desarrollo local en las comunidades de estos territorios, así como han permitido intervenciones más eficientes y con un mayor impacto en las condiciones de vida de estas personas.

“El centro de esta intervención ha sido entender que así como la guerra tuvo un fuerte impacto en el territorio, y en todos sus habitantes, este mismo territorio es el que debe transformarse en función del posconflicto” (*Revista Semana*, 11/18/2013).

Sin embargo, uno de los mayores retos no solo para la consecución de los objetivos del programa de Reconstrucción Económica y Social de el Corregimiento de El Salado sino para todo el proceso de postconflicto, será el fortalecimiento de los gobiernos locales y de la sociedad civil, especialmente en las regiones rurales de Colombia.

SOCIEDAD CIVIL Y DESARROLLO LOCAL EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO EN COLOMBIA: CORPORACIÓN VALLENPAZ

La sostenibilidad de la paz en zonas afectadas por el conflicto armado no solo depende de la presencia del Estado y de otros actores interesados, como la empresa privada y los cooperantes internacionales, es de vital importancia también que la población se apropie del proceso de construcción de paz, especialmente aquella que ha sido víctima de la confrontación armada.

La Sociedad Civil en Colombia no se ha limitado a un rol pasivo en medio del conflicto y las negociaciones de paz, sino que ha asumido por cuenta propia la búsqueda y construcción activa de soluciones estructurales a las causas del mismo, mediante la creación de redes entre diferentes actores sociales para llevar a cabo proyectos de paz y desarrollo. En las últimas décadas se han conformado en Colombia un importante número de iniciativas de consolidación de paz desde la sociedad civil en contextos tanto urbanos como rurales.

En diversas regiones de Colombia existen en la actualidad una multiplicidad de iniciativas desde la sociedad civil que tienen como objeto entonces apoyar el desarrollo local de las comunidades más desfavorecidas permitiendo así la superación de las causas del conflicto. La sociedad civil se ha organizado de diversas formas para el desarrollo y soporte jurídico de estos proyectos tales como corporaciones, fundaciones, consorcios, entre otras.

A continuación se presentará el caso de la Corporación VallenPaz, entidad sin ánimo de lucro con más de 15 años de experiencia, que trabaja para el desarrollo de las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado en el suroccidente colombiano. La estrategia de actuación de VallenPaz privilegia el modelo de trabajo de las cooperativas, ya que el estimular la producción agropecuaria asociativa y a escala local permite alcanzar ciertos niveles de desarrollo rural especialmente, pero no solo, en los territorios que han sido afectados por la violencia y la guerra.

VallenPaz es una organización no gubernamental que nació a mediados del año 2000, como una propuesta de la sociedad civil del departamento del Valle del Cauca, “dedicada a la construcción de la paz, a través del desarrollo humano y socio económico de los pequeños agricultores de las regiones más azotadas por el conflicto armado, en el sur-occidente colombiano” (VallenPaz, 2011). El propósito de VallenPaz es entonces mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas de la región mediante la asociación de una multiplicidad de actores para generar dinámicas locales que permitan el desarrollo integral y la superación del conflicto.

Esta asociación se conformó en sus inicios en la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, escenario en donde se presentaba a la fecha una profunda crisis institucional y de legitimidad del Estado nacional y local, producto en parte del fracaso de las negociaciones de paz del gobierno de turno, y de un recrudecimiento del conflicto armado, marcado por los fuertes ataques en contra de las élites económicas y políticas de la ciudad.

Lo anterior predispuso el ambiente necesario para que aquellos actores, que ya se encontraban en búsqueda de alternativas para superar el conflicto, dieran el paso necesario para conformar la Corporación VallenPaz: “El tema era la necesidad de reconocer una forma para que el campesino se quedara en el campo, porque una de las hipótesis era que quienes están sirviendo a la guerrilla son personas del campo que no tienen qué hacer. Entonces había que pensar cómo hacer para que esa gente del campo se pueda quedar y se pueda quedar con unas buenas condiciones de vida. El tema era parar el desplazamiento, un tema que sigue siendo importantísimo para el país (miembro de la Junta VallenPaz)” (Barón, Solarte, Jaramillo, Unás y Velazco, 2010, p. 236).

En los 15 años de actividad de VallenPaz, 13.800 familias campesinas en zonas de conflicto han sido beneficiarias de proyectos para desarrollo rural y local por un valor de \$64.900 millones de pesos (21 millones de euros aproximadamente). Para el año 2015 se espera ejecutar una inversión de \$25.000 millones de pesos (7 millones de euros más o menos).

La principal fuente de financiación de esta organización han sido los cooperantes internacionales (especialmente la Unión Europea), seguidos por el Estado y la empresa privada, sin embargo en los últimos años en Colombia los fondos provenientes de la cooperación han disminuido sustancialmente y se espera que esta tendencia continúe al ir mejorando los índices de desarrollo humano del país, no obstante, los recursos públicos destinados a iniciativas de este tipo se han incrementado.

La región en la que actúa la Corporación VallenPaz, 27 municipios en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Risaralda, se ha caracterizado históricamente por su potencial agrícola y por la presencia de importantes agroindustrias, especialmente la del azúcar, sin embargo se destaca también por una alta concentración de la tierra y consecuentemente por la presencia de movimientos campesinos que han luchado por la posesión de la misma. Cabe resaltar que el porcentaje de población que vive en zonas rurales en esta región es mayor al de personas que viven en espacios urbanos, por lo que la tenencia de la tierra ha sido un tema con importantes implicaciones económicas, políticas y sociales.

A pesar de la alta productividad de la región los niveles de pobreza y exclusión sobrepasan los promedios nacionales, con un importante porcentaje de la población viviendo bajo la línea de pobreza. Esto se hace más evidente en las zonas rurales: los indicadores de pobreza en éstas son casi el doble que los de las zonas urbanas.

Asimismo, esta es una región con un carácter multiétnico ya que existe una importante presencia, movilización y organización de comunidades indígenas y afrocolombianas, ubicadas en su mayoría en zonas rurales, y aunque son poblaciones organizadas y con una fuerte estructura comunitaria, son éstas las más golpeadas por la pobreza y la violencia en estos departamentos. No es de extrañar entonces que las poblaciones étnicas sean mayoría en las cifras de desplazamiento forzado, especialmente aquellas que viven cercanas al océano Pacífico.

El suroccidente colombiano ha sido un territorio en disputa para los diferentes grupos armados ilegales que hacen presencia en el país, ya que su cercanía con el océano Pacífico lo convierte en un escenario estratégico para el cultivo de plantas base para la producción de drogas ilícitas y para la planificación de rutas para su tráfico⁶. El negocio del narcotráfico se ha convertido en una forma de sustento para las comunidades rurales empobrecidas de la región, por lo que su erradicación representa una problemática importante para la población que vive solamente de la economía ilegal.

Dado el contexto del conflicto y la violencia en la región de influencia de VallenPaz, eminentemente rural y con efectos negativos en el desarrollo de las comunidades campesinas y étnicas de la zona, el trabajo de esta corporación de la sociedad civil se centra en la búsqueda de herramientas para potenciar las capacidades endógenas de las poblaciones rurales de esta región con el fin de que éstas se empoderen de su propio desarrollo, siempre en condiciones de legalidad.

La planificación de los diferentes proyectos realizados por VallenPaz se ha sustentado en la premisa de que deben ser las mismas comunidades las que identifiquen sus propias necesidades y participen en la planeación, ejecución y evaluación de las estrategias y acciones que permitan superarlas. Dichas intervenciones deben tener en cuenta la diversidad étnica y sociocultural de la población y buscar la integralidad y sostenibilidad de

⁶ Según un estudio publicado en el 2014 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), al año 2013 el área afectada por cultivos de coca a nivel nacional era de 89.215 hectáreas, de las cuales 18.562 se encontraban en la región pacífica, siendo ésta la más afectada a nivel nacional.

las mismas, logrando un desarrollo tanto económico como social que sea también respetuoso con el medio ambiente.

La actuación de esta organización responde entonces a un enfoque estratégico con el que se busca dar una respuesta a problemas de orden estructural mediante la definición de 7 líneas de acción que agrupan los diferentes proyectos llevados a cabo en el acompañamiento a estas comunidades rurales. Las líneas de acción son en los campos de: organización social, organización empresarial, seguridad alimentaria, productividad, infraestructura productiva, comercialización, cultura de paz y derechos humanos.

VallenPaz es una iniciativa que ha logrado conjugar diferentes comunidades, etnias, clases y espacios sociales, articulando experiencias y saberes urbanos en un entorno rural marcado por la incertidumbre y la desconfianza generadas por el conflicto armado. Esta iniciativa no solo es el fruto de las élites locales, es el resultado de los esfuerzos de actores de diversa naturaleza, como intelectuales, políticos, empresarios y líderes comunitarios, que han logrado construir a partir de experiencias diferentes de gestión, como la filantropía y la responsabilidad social empresarial y en medio de una crisis de legitimidad del Estado y del escalamiento del conflicto armado, una iniciativa de paz y desarrollo local.

“Así esta acción colectiva no solo ha logrado dar visibilidad al problema agrario sino mostrar, con resultados tangibles, que en las regiones de Colombia se han construido alternativas viables para superar la pobreza y el conflicto armado y social” (Barón, Solarte, Jaramillo, Unás y Velazco, 2010, p. 232).

VallenPaz en sus 15 años de gestión ha logrado contribuir a la construcción de confianza entre diferentes instancias: empresarios, Estado, sociedad civil y comunidad lo cual ha permitido el aumento del capital social en los territorios rurales, apostando además por el restablecimiento y respeto de la institucionalidad.

En relación a esto, uno de los logros más importantes de esta organización ha sido la transformación cultural y el cambio de mentalidades en las zonas en donde ha trabajado, ejemplificado por el proceso de sustitución de cultivos ilícitos llevado a cabo por las comunidades del Cauca, acabando con el mito de que estos son más rentables y requieren menos trabajo; por el surgimiento de nuevos movimientos sociales, rompiendo el estigma de que estos generan desorden e inestabilidad; y por la apuesta por la reconciliación entre víctimas y desmovilizados de las guerrillas, integrando a ambos colectivos en proyectos sociales y económicos.

Es además otro logro de VallenPaz y de las organizaciones de la sociedad civil, la capacidad para visibilizar y poner en la agenda regional y nacional los problemas de pobreza, inequidad y violencia que azotan al campo en Colombia, pero sobre todo para construir alternativas de superación para estos problemas (Barón, Solarte, Jaramillo, Unás y Velazco, 2010, p. 257). Sin duda, esta es una de las causas que ha permitido el reconocimiento de VallenPaz como uno de los programas de desarrollo y paz más exitosos y con mejor crecimiento de sus proyectos productivos.

A pesar de esto, el desafío más grande que enfrenta esta corporación y las demás organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las zonas rurales colombianas es tal vez el relacionado con la desigualdad en la propiedad de la tierra, puesto que el 60% de los beneficiarios no son propietarios, así como la inequidad e inadecuada utilización de los recursos para trabajarla. Los resultados que los programas de paz y desarrollo pueden obtener se verán siempre reducidos debido a la problemática que representa el acceso a la tierra y los recursos en Colombia, que las políticas de desarrollo rural (o la ausencia de las mismas) y reparación de víctimas parecen no haber logrado superar como se ha mencionado con anterioridad.

Además no debe olvidarse que en los territorios en donde VallenPaz ejerce su labor, son zonas en donde la influencia económica y política de las agroindustrias y la concentración de la tierra en propiedad de éstas, es quizás mayor que en cualquier otra región del país. Ante esta situación, y aunque la labor de VallenPaz no es política, valdría la pena utilizar la influencia que tiene en varios círculos de poder a nivel local, regional y nacional, para promover activamente la discusión sobre las problemáticas de la tierra en el país entre los diferentes entes gubernamentales, otras organizaciones sociales, la academia, y los industriales propietarios de la misma. Y, aunque si bien, ha habido avances en el tema, “Vallenpaz se puede ver enfrentado a diferentes propietarios y sectores productivos de la región que puedan sentirse amenazados por los logros del proyecto (como la recuperación y uso de la tierra por parte de los pequeños propietarios en el Norte del Cauca)” (Barón, Solarte, Jaramillo, Unás y Velazco, 2010, p. 250).

El conocimiento producto de la trayectoria de VallenPaz en la región puede ser significativo no solo en la discusión del problema agrario, sino también en la formulación e implementación de políticas públicas en esta materia, sin embargo, para esto es necesario que tanto las organizaciones de la sociedad civil, como las comunidades, fortalezcan sus capacidades políticas, como el *accountability* a los gobernantes locales y regionales. No obstante, estaría el riesgo de que este proyecto se politizase y se convirtiese en un instrumento de perpetuación en el poder de los sectores económicos y políticos de la región.

Por otra parte, y en un escenario en donde los fondos de la cooperación internacional han comenzado a escasear, VallenPaz debe buscar la forma de diversificar aún más su fuente de ingresos para garantizar la sostenibilidad del proyecto, ya que lo que está en juego es la integralidad del programa y del desarrollo que se pretende conseguir.

Finalmente, queda por decir que el trabajo de organizaciones de la sociedad civil como VallenPaz se desarrolla entonces en una nueva coyuntura en donde la tierra y el desarrollo rural y local se han alzado como elementos clave para el postconflicto en Colombia, mediante la ayuda a la superación de las condiciones de exclusión históricas en las que las comunidades rurales han tenido que subsistir. Aun así, y contradictoriamente, son el Estado y la empresa privada, por acción u omisión, los que parecen poner a veces un freno a los esfuerzos de estos programas y al objetivo de empoderar a las comunidades que buscan su propio desarrollo y la consolidación de la paz.

CONCLUSIONES

Los diálogos de paz con las guerrillas y el mejoramiento de las condiciones de seguridad en general han abierto una posibilidad para la terminación del largo conflicto armado en Colombia, la cual han aprovechado una serie de actores, como el Estado, la empresa privada y la Sociedad Civil, para impulsar iniciativas de postconflicto enfocadas en consolidar la paz, especialmente en las zonas rurales del país, históricamente marginadas y foco del conflicto por la tierra, a través de la generación de condiciones para el desarrollo local de las comunidades rurales. A través de estas páginas se ha intentado demostrar como la promoción del desarrollo local en estas comunidades, las más afectadas por el conflicto armado, pueden marcar la diferencia en sus condiciones de vida y en su deseo de retornar al campo, y en general para la consecución y mantenimiento de la paz.

Lo que se ha hecho

La experiencia internacional y la literatura han demostrado que en un proceso de postconflicto no todo el peso de asegurar la paz y el desarrollo debe caer sobre el Estado, otros actores como la sociedad civil y la empresa privada tienen una incidencia importante en el establecimiento de las condiciones necesarias para una paz con garantías para la población. En el caso colombiano, estos actores han asumido una responsabilidad importante al iniciar proyectos de postconflicto en un escenario en donde la guerra aún no ha terminado pero la comunidad desea dar un paso adelante y dejar ésta atrás.

El papel del Estado en las etapas de finalización del conflicto y posteriores a la firma de la paz es crucial para asegurar la sostenibilidad de la misma, ya que debe ser éste el que garantice en una primera instancia que la población tenga los medios para su desarrollo en condiciones de legalidad.

En Colombia, el Estado ha desarrollado infraestructuras de paz, es decir una serie de políticas e instituciones necesarias para poder implementar lo que se acuerde en las negociaciones de paz, sin embargo, el Gobierno ha decidido hacerlo antes de que éstas finalicen para ganar tiempo y que los procesos estén listos y sean eficientes cuándo llegue el momento en el que el conflicto termine.

Aun así cabe preguntarse si la solución al conflicto debe ser la formulación de más leyes o la creación de nuevas instituciones, ya que esto implica el crecimiento del cuerpo burocrático estatal con el correspondiente aumento del gasto público, recursos que podrían invertirse en el mejoramiento de las entidades existentes para la ampliación de su capacidad y que puedan ser éstas las que se hagan cargo de las iniciativas propuestas. El Estado podría invertir también en la creación de agendas, relaciones y propuestas que fortalezcan las instituciones establecidas y que lo lleven a ser el ente transformador que la sociedad colombiana necesita.

Sin embargo, al ser la problemática de la tierra tan importante para la solución del conflicto en Colombia, la actuación del gobierno en este tema ha sido un paso importante para la solución de éste. El Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Víctimas y Restitución de

Tierras son un marco normativo innovador para el cambio estructural de las causas históricas del conflicto, pero como se mencionó con anterioridad estos instrumentos están todavía a medio camino de lograr sus objetivos.

El Plan Nacional de Desarrollo diseñado por el gobierno actual institucionaliza la voluntad política del Estado de generar desarrollo en las regiones y territorios rurales más castigados por la inequidad y la violencia, reconociendo “las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos poblacionales” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, p. 56). El enfoque territorial de este plan es beneficioso para un escenario de superación del conflicto ya que impulsa la integración productiva de las comunidades que más lo necesitan (especialmente las campesinas, los desplazados y desmovilizados), mediante el diseño de programas de inversión productiva e infraestructura, que permitan a estas personas permanecer o reasentarse en su territorio y superar las condiciones de mera subsistencia para aspirar a un desarrollo local.

El obstáculo más grande para cumplir con este objetivo es tal vez el Estado mismo, primero por la dificultad de éste de descentralizar sus funciones, ya que Colombia ha sido un país que históricamente ha tenido sus gestiones y actividades políticas centralizadas en la capital, lo que ha impedido que muchas comunidades se acerquen a la institucionalidad, y segundo, la política de los diferentes gobiernos colombianos ha incentivado un modelo de desarrollo rural basado en los megaproyectos y explotaciones a gran escala de productos agroindustriales, en lugar de la agricultura a pequeña escala y de subsistencia, lo cual afecta determinadamente a los pequeños productores.

Por otra parte, la Ley de Reparación de Víctimas y de Restitución de Tierras, proyecto bandera del gobierno actual, busca una transformación única en el campo colombiano mediante la formalización de la tierra y el acceso democrático a los recursos necesarios para trabajarla. Sin embargo, el proceso administrativo y de implementación de la ley no ha avanzado con la celeridad esperada para cumplir con las metas presupuestadas, por lo que el acceso y la garantía de la propiedad sobre la tierra para las comunidades que más lo necesitan no están del todo asegurados, comprometiendo el desarrollo productivo y social de éstas.

A pesar de esto, se han logrado sentencias favorables de restitución, muchas de las cuales incluyen medidas adicionales en vivienda, infraestructuras de servicios y subsidios productivos, para garantizar el retorno efectivo y sostenible de las personas a sus tierras, sin embargo, en la realidad algunas de estas condiciones no están siendo restauradas, por lo que el retorno en estos casos no ha sido posible. Además de esto, otro grave obstáculo para la restitución ha sido el tema de la seguridad, tanto para los líderes y participantes del proceso como en los territorios en donde se debe aplicar, especialmente afectadas se han visto las comunidades indígenas y afrodescendientes por esta problemática.

En cuanto a la participación de la empresa privada en el postconflicto en Colombia, se presentó el caso de la reconstrucción física y social de El Salado en la región de los Montes de María, liderada por la Fundación Semana, proyecto que ha dotado de notoriedad al

sector privado como un agente de cambio en la superación del conflicto y la construcción de una paz sostenible, gracias al éxito que ha tenido en su iniciativa de apoyo al desarrollo local de este pueblo marcado por la violencia.

El Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento de El Salado ha logrado potenciar la cooperación y complementariedad entre diferentes empresas de variadas capacidades con las instituciones gubernamentales y otras organizaciones presentes en la zona. Gracias a esto, se ha logrado también acercar a la población con el Estado, sin embargo, cabe preguntarse si la Fundación Semana no ha pasado a suplir a éste último en el imaginario colectivo de la comunidad local y las implicaciones que esto puede tener cuando el proyecto finalice.

Aun así cabe resaltar que la participación y liderazgo activo de la empresa privada puede ser el factor principal por el cual este proyecto ha contado con procesos más eficientes y con mayor impacto en las condiciones de vida de la comunidad de El Salado, en contraste con las iniciativas del Estado, las cuales en la mayoría de las ocasiones no han contado con el resultado deseado debido a la improvisación con la que a veces se ejecutan.

Sobre la intervención de la Sociedad Civil en el postconflicto se tiene el ejemplo de la Corporación VallenPaz, organización que representa los intereses de varios sectores de la ciudadanía en favor de la consolidación de la paz, especialmente en zonas rurales del suroccidente colombiano. La intervención de esta organización privilegia el establecimiento de procesos regionales y locales de desarrollo para la reactivación económica de los territorios afectados por el conflicto armado y para el fortalecimiento de las asociaciones comunitarias de los pequeños agricultores.

La integralidad de la intervención planificada por VallenPaz no solo ha conllevado un mejoramiento en los aspectos económicos de las comunidades acompañadas, sino que también ha traído mejoras en materia de organización social, salud y nutrición, resolución pacífica de conflictos, acercamiento a la institucionalidad del Estado e infraestructura. Sin embargo, es el empoderamiento de la comunidad sobre su propio proceso de desarrollo, el logro más importante de VallenPaz en su intervención con las poblaciones rurales del suroccidente colombiano.

Como se ha visto con anterioridad, esta intervención no ha estado exenta de retos y desafíos, entre los que se encuentran principalmente, la sostenibilidad financiera de la Corporación a futuro dada la disminución substancial de los fondos de la cooperación internacional, fuente principal de los recursos con los que está contaba; la búsqueda de compatibilidad entre las costumbres y tradiciones productivas de las comunidades y los requerimientos formales de las instituciones financieras y empresas comercializadoras; y por último, la necesidad de que la corporación logre utilizar su creciente influencia en la institucionalidad regional para mediar en el diseño de la política pública de desarrollo rural y local de sus áreas de influencia, con el fin de que los efectos e impactos conseguidos no sean transitorios; y por último, las falencias del Estado a la hora de garantizar el acceso a la tierra para todos los agricultores que la necesitan.

Lo que se puede hacer

Una estrategia de desarrollo local para el postconflicto, independientemente del actor que la ejecute, debe tener en cuenta primero, que el crecimiento económico no es sinónimo de superación de la pobreza, ya que si la riqueza generada no se distribuye de manera equitativa no habrá desarrollo para todos; segundo, que muchas comunidades no pueden ser gestoras de su propio desarrollo todavía, especialmente después de años de conflicto, por lo que se hace necesario que el Estado asegure su bienestar mediante políticas públicas y que haya acompañamiento para que éstas puedan trabajar por el mejoramiento de su situación; y tercero, que cada proceso es diferente ya que depende de las capacidades, tradiciones, cultura, organización y recursos que posee cada comunidad en un territorio determinado, por lo que la aplicación de modelos estándar de intervención están condenados a fracasar si no se ajustan a las necesidades específicas de cada lugar.

A partir de esto, es necesario entonces que el Estado armonice su política económica con el diseño de su estrategia de postconflicto, ya que el impacto de esta se verá seriamente limitado si se perpetua un modelo económico que legitima los factores históricos y estructurales del conflicto, así como evita la superación de la extrema desigualdad en la distribución de los ingresos y la disminución de los elevados índices de pobreza, especialmente en zonas rurales.

Iniciativas como la restitución de tierras jamás serán posibles de culminar con éxito si no se reconoce por parte del Estado el papel que los intereses económicos de grandes industrias extractoras de recursos primarios han tenido en la problemática de la tierra. El reto del Estado es en este sentido llevar a cabo una reforma agraria exitosa, que contemple la compra y redistribución de tierras privadas para que una mayor cantidad de pequeños agricultores y asociaciones campesinas tengan acceso a ésta.

El Estado debe también apostar por la descentralización, ya que el contexto multicultural y multirregional colombiano, exige que las políticas de desarrollo económico y local sean diseñadas con un enfoque territorial. Además, es necesario que se trabaje en el fortalecimiento de la institucionalidad local y regional con la finalidad de que el presupuesto pueda llegar a estos niveles, sin riesgo de corrupción o malversación, y haya así un proceso efectivo de lucha contra la pobreza en el campo y desarrollo rural.

Por otra parte, la sinergia entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, es la estrategia más acertada para sentar las bases de un desarrollo local en contextos como el colombiano en donde la cooperación internacional empieza a disminuir, ya que implica la construcción de capital social, mientras se asegura financiación, capacidades técnicas e infraestructuras. En este sentido se hace necesario que las intervenciones diseñadas desde cualquiera de estos actores, comprometa en algún punto la actuación de las demás, con la finalidad de generar procesos sostenibles y de mayor impacto.

En cuanto al diseño de proyectos de desarrollo local rural, estos deberían formularse de manera integral y en perspectiva territorial, incluyendo los recursos existentes, la vocación de las tierras, la diversidad étnica y cultural y promoviendo la participación equitativa de toda la comunidad. Igualmente, estos deberían promover la modernización del campo,

mediante la utilización de técnicas ambientales y sostenibles que beneficien a pequeños y medianos productores asociados o no, y que permitan ofrecer un valor agregado a sus productos que facilite su acceso a los mercados.

Sin embargo, es también importante promover la diversificación de las actividades del campo en Colombia, que permita superar los ingresos de una economía de subsistencia con la que viven casi la mayoría de los campesinos. En este sentido, deben diseñarse estrategias de desarrollo local que utilicen todo el potencial que poseen los espacios rurales en este país, más allá de la agricultura, como el ecoturismo y el turismo rural, las actividades deportivas, la transformación de materias primas en bienes de consumo, entre otras.

Iniciativas como el Biocomercio, impulsado especialmente desde el Estado y organizaciones privadas, son un ejemplo de innovación y diversificación para el desarrollo rural, ya que se utilizan los recursos disponibles en el campo para iniciativas ambientalmente sostenibles de agricultura, ecoturismo, plantaciones para uso ornamental (flores, especialmente orquídeas), elaboración de productos alimenticios y objetos como muebles y materiales de construcción, entre otros. Esto es además una oportunidad para la consolidación de paz en el campo debido a que estimula la cohesión social y la productividad de las comunidades rurales.

Para concluir, la paz no es entonces solo el producto entre la negociación del gobierno de turno y los grupos armados al margen la ley, es el compromiso de una multiplicidad de actores de trabajar por la superación de las causas estructurales del conflicto que le permitan al conjunto de la sociedad contar con las mismas oportunidades para su desarrollo: “Sólo es posible pasar de la guerra a la paz cuando las ganancias en una situación de paz —exceden las pérdidas que se ocasionarían al renunciar a los beneficios que se obtienen durante una guerra. Si simplemente se erradican estas actividades y no se proporcionan alternativas, los individuos no tienen otro modo de ganarse la vida, ni de mantener a sus familias, lo cual es extremadamente perjudicial para el proceso de consolidación de la paz” (OIT, 2010, p. 55).

Cuadro 1. Análisis DAFO del proceso de postconflicto en zonas rurales de Colombia

Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> - Centralización estatal - Instituciones gubernamentales locales y regionales débiles - Concentración en la tenencia de la tierra 	<ul style="list-style-type: none"> - Surgimiento de nuevas formas de crimen organizado - Disminución importante de los fondos provenientes de la cooperación

<ul style="list-style-type: none"> - Altos índices de pobreza e inequidad en zonas rurales - Ausencia de una política pública de desarrollo rural - Sector agricultor poco competitivo - Falta de diversificación económica en el campo colombiano - Conflicto armado inacabado - Comunidades rurales debilitadas organizacional y económicamente - Falta de garantías de seguridad, infraestructura y de acceso a la tierra para el retorno de los desplazados al campo - Escasa participación política de la sociedad civil organizada - Excesiva burocracia y tramitología para acceder a los proyectos estatales - Multiplicidad de actores con objetivos y metodologías diferentes que dificultan la formación de alianzas 	<p>internacional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prevalencia de los intereses económicos de las grandes industrias extractoras en detrimento de los de los campesinos y cooperativas - Estandarización de modelos de intervención que no respondan a las necesidades específicas de los territorios - Decisiones de política internacional que repercuten en la economía rural como los Tratados de Libre Comercio - Posibilidad de terminación de las negociaciones sin la firma de la paz.
Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> - Desescalamiento del conflicto armado y negociaciones de paz - Deseo generalizado de paz y reconciliación de la población - Mayores recursos desde el Estado para el desarrollo rural - Participación activa de la Sociedad Civil y la empresa privada en iniciativas de postconflicto y desarrollo local rural - Planificación de iniciativas con enfoque territorial y con una metodología bottom-up - Infraestructuras de paz (leyes, planes, entidades) en marcha desde el Estado - Proyectos que se plantean más allá del asistencialismo y buscan el desarrollo local de las comunidades - Búsqueda de la integralidad en cada propuesta de desarrollo - Recuperación del tejido social en algunas de las comunidades rurales más afectadas por el conflicto - Mayor interés por las actividades económicas legales y ambientalmente sostenibles 	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo institucional, técnico y financiero de numerosos actores internacionales al proceso de postconflicto - Posibilidad de diversificar económicamente el campo gracias al interés de nuevos mercados e inversores - Disminución de las hectáreas de cultivos ilícitos en el país, lo cual permite nuevas actividades económicas legales.

Fuente: Elaboración propia.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA DÍAZ, M. Montes de María: una subregión de economía campesina y empresarial. *Documentos de Trabajo sobre Economía Regional*, 2013, nº 195, p. 1-93.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. *Un título de propiedad no basta. Por una restitución sostenible de Tierras en Colombia*. Londres: Amnesty International LTD, 2014.

ARBOLEDA, J., CAJIAO, A., RETTBERG, A. y RIVAS, A. *Sector privado y desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, 2011.

ASCOOP. *Lecciones desde el cooperativismo para un país en paz y desarrollo*, 2014. Disponible en: <<http://www.ascoop.coop/archivonoticias/columna-de-la-semana/para-un-pais-en-paz-y-desarrollo-lecciones-desde-el-cooperativismo-colombiano>>. [11 de julio de 2015].

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES (ANDI), CONSEJO NACIONAL DE INDUSTRIA SUECA (NIR), FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP). *¿Cómo construir paz en Colombia?*, 2014. Disponible en: <<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5331f14d6c26d.pdf>>. [15 de julio de 2015].

BANFIELD, J., GÜNDÜZ, C. y KILLICK, N. (Eds.). *Local Business Local Peace. The Peace Building Potential of the Domestic Private Sector*. Londres: International Alert, 2006.

BARRETO Henriques, M. El Laboratorio de Paz del Cauca/Nariño: ¿una salida indígena para la paz en Colombia? En: Restrepo, Jorge y Aponte, David (Eds.) *Guerra y violencia en Colombia: herramientas e interpretaciones*. Bogotá: Editorial Javeriana, 2009, p. 545-586.

BARRETO Henriques, M. Preparar el post-conflicto en Colombia desde los programas de desarrollo y paz: retos y lecciones aprendidas para la cooperación internacional y las empresas. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, Bogotá, 2014, vol. 9, n° 1, p. 179- 191.

BARON PORRAS, L., SOLARTE, L., JARAMILLO, E., UNAS, V. y VELAZCO, M.I. *Estudio sobre buenas prácticas para el desarrollo de proyectos sociales de Vallepaz*. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 2010.

BELTRÁN, J., y PIÑEROS A. *Sector agropecuario colombiano: su realidad económica y perspectiva*. Bogotá: Universidad EAN, 2013. Disponible en: <<http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1>>. [4 de marzo de 2015].

BERGSMO, M., GARAVITO RODRÍGUEZ, C., KALMANOVITZ, P. y SAFFON, M. *Justicia distributiva en sociedades en transición*. Oslo: Torkel Opsahl Academic, 2012.

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. *Informe General de Memoria Histórica: “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.

COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. *El Despojo de tierras y tierras y territorios. Aproximación Conceptual*. Bogotá: Editorial Kimpres, 2009.

CONSORCIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL DEL TERCER LABORATORIO DE PAZ. *Campesinos, tierra y desarrollo rural. Reflexiones desde la experiencia del Tercer Laboratorio de Paz*, 2011. Disponible en: <http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/projects/cartilla_tierra_y_desarrollo_lab_paz_iii_es.pdf>. [9 de julio de 2015].

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. *II Informe de seguimiento al proceso de restitución de tierras*, 2013. Disponible en: <<http://www.contraloria.gov.co/documents/155638087/161616579/Restituci%C3%B3n+de+Tierras+II+2013.pdf/93c00df9-4e7a-43a4-9e11-75dc5f426246?version=1.0>>. [9 de julio de 2015].

CÓRDOBA, R., GALVIS, H., GAVIRIA, A. y GÓMEZ, H. *Una mirada al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014*. Bogotá: FEDESARROLLO, 2011.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). *Boletín Técnico. Principales indicadores del Mercado Laboral*, 2015. Disponible en: <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_15.pdf>. [18 de marzo de 2015].

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. *Plan Nacional de Desarrollo. Tomo I*, 2011. Disponible en: <<https://sinergia.dnp.gov.co/SISMEG/Archivos/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf>>. [9 de julio de 2015].

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. *Plan Nacional de Desarrollo. Tomo II*, 2011. Disponible en: <<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20II%20CD.pdf>>. [9 de julio de 2015].

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. *Balance de Resultados año 2013: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014*, 2014. Disponible en: <<https://www.dnp.gov.co/estudios-y-publicaciones/publicaciones/Paginas/2013.aspx>>. [10 de julio de 2015].

GOMEZ TATIS, D. Hacia el fortalecimiento de capacidades de gestión pública en un escenario de postconflicto en San Jacinto (Bolívar), Montes de María, Caribe Colombiano. *Equidad y Desarrollo*, 2013, n° 20, p. 211-228.

GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA. *La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra*. Bogotá: Taurus y Pensamiento, 2009.

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER). *Programación presupuestal de inversión (vigencia 2013)*, 2013. Disponible en:

<http://www.incoder.gov.co/documentos/A%C3%91O_2014/Gestion_Incoder/Programas_Proyectos/8%20%20IPDR.pdf>. [5 de abril de 2015].

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER). *Implementación de proyectos de desarrollo rural a nivel nacional*, 2013. Disponible en: <http://www.incoder.gov.co/documentos/A%C3%91O_2014/Gestion_Incoder/Programas_Proyectos/8%20%20IPDR.pdf>. [4 de marzo de 2015].

LOZANO, P. *Escenarios de posconflicto en Colombia*. Barcelona: Instituto Catalán para la Paz, 2014.

MACHADO A. *Esbozo de una memoria institucional. La política de reforma agraria y tierras en Colombia*. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. *ABC DEL Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural*, 2013. Disponible en: <<http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/noticia/PLTDR%20cartilla.pdf>>. [9 de julio de 2015].

MINISTERIO DEL INTERIOR. *Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras*, 2011. Disponible en: <<http://www.unidadvictimas.gov.co/normatividad/LEY+DE+VICTIMAS.pdf>>. [5 de junio de 2015].

MOLANO ROJAS, A. *Entre transición y restauración: desafíos para la sociedad colombiana en el posconflicto*. Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, 2014.

MORALES Nieto, J. *Esbozo de una estrategia de postconflicto*, 2013. Disponible en: <http://cider.uniandes.edu.co/@Eventos/Eventos/Evento_Posconflicto12-13-nov2013/CIDER%20%20Esbozo%20de%20estrategia%20post-conflicto1.pdf>. [19 de abril de 2015].

NIÑO, L.C. “VallenPaz” Programa de desarrollo y paz del Suroccidente Colombiano. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 2005, vol. 55, p. 51-59.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA EL TRABAJO. *La recuperación económica local en situaciones de posconflicto*, 2010. Disponible en: <http://ilo.org/employment/areas/crisis-response/WCMS_193480/lang--es/index.htm>. [19 de abril de 2015].

Planeta Paz. *La cuestión agraria en Colombia: tierra, desarrollo y paz. Memorias ciclo de conversatorios*. Bogotá: Planeta Paz, 2012.

POLITZER, G. *Principios elementales y fundamentales de Filosofía*. Madrid: Akal, 1985.

PRANDI, M. y LOZANO, J.M. (Eds.). *La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor*. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 2010.

RAMOS, E. y GARRIDO, D. (Eds.). *Desarrollo Rural Territorial. Metodología y Aplicación para el Estudio de Casos*. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011.

RED ADELCO (Agencias de Desarrollo Local de Colombia). *Conversatorio: Desarrollo económico local y conflicto: perspectiva de paz territorial. Sistematización de conclusiones sobre visiones institucionales hacia una paz duradera*, 2014. Disponible en <<http://www.redadelco.org/wp-content/uploads/2014/02/Memorias-del-Conversatorio-DEL-PNUD.pdf>>. [19 de abril de 2015].

ROSALES, M y URROLA, R. *Hacia un modelo de desarrollo económico local y cohesión social*, 2011. Disponible en: <http://www.urb-al3.eu/uploads/noticias/paper_III_DR.pdf>. [19 de mayo de 2015].

UNIDAD DE GESTIÓN Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS. *Implementación Programa de Restitución de Tierras Rurales a las víctimas del despojo y/o abandono de predios nacionales (vigencia 2013)*, 2013. Disponible en: <<https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/39fecaff-f987-440a-b7bf-e72c7b74e720>>. [3 de junio de 2015].

UNODC. *Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2013*, 2014. Disponible en: <https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2013_web.pdf>. [11 de julio de 2015].

RECURSOS ELECTRÓNICOS

ARROYO, M. (Mayo de 2009). Cosechas para la paz en Colombia. *El Mundo*. Disponible en: <http://www.elmundo.es/especiales/2009/05/solidaridad/colombia/alimentando_esperanza.html>. [30 de julio de 2015].

BAENA JARAMILLO, M. P. Biocomercio, una salida en el posconflicto. *El Espectador*, 22 de julio de 2015. Disponible en: <<http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/biocomercio-una-salida-el-posconflicto-articulo-574415>>. [12 de agosto de 2015].

Censo General 2005. Departamento Nacional de Estadística (DANE). Disponible en: Disponible en: <<http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-registros-vitales/censos/censo-2005>> [12 de agosto de 2015].

Comisión de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas. Disponible en: <http://www.un.org/es/peacebuilding>. [12 de agosto de 2015].

Corporación para el Desarrollo y Paz del Suroccidente Colombiano “VallenPaz”. Disponible en: <http://www.vallenpaz.org.co>. [12 de agosto de 2015].

Fundación Semana. Disponible en: <http://www.fundacionsemana.com/home>. [30 de julio de 2015].

GARCÍA SIERRA, A. El Valle del Cauca debe ser líder rural en el posconflicto. Director de VallenPaz. *El País*, 4 de marzo de 2015. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/valle-cauca-debe-ser-lider-rural-posconflicto-director-vallenpaz>. [30 de julio de 2015].

NAVARRETE, S. La historia de la primera restitución de tierras en una zona de reserva forestal. *El Espectador*, 2 de diciembre de 2014. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/historia-de-primera-restitucion-de-tierras-una-zona-de-articulo-530832>. [1 de febrero de 2015].

PAYÁN, X. VallenPaz beneficia a 11 mil familias productivas. *El País*, 4 de septiembre de 2011. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/once-anos-cultivando-paz-en-region>. [30 de julio de 2015].

VALERO, D. Vamos a comprar tierras a los privados para el posconflicto. *El Tiempo*, 2 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/entrevista-con-el-ministro-de-agricultura-aurelio-iragorri/16181557>. [12 de agosto de 2015].

\$25.000 millones anuncia VallenPaz para el 2015. *El País*, 27 de marzo de 2015. Disponible en: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/25000-millones-anuncia-vallenpaz-para-2015>. [30 de julio de 2015].

Analfabetismo en niños que viven en campo colombiano alcanza 11.5%. *El Tiempo*, 11 de agosto de 2015. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/economia/sectores/censo-nacional-agropecuario-resultados-dane/16219895>. [12 de agosto de 2015].

Caficultura será clave en el postconflicto colombiano. *El Espectador*, 5 de diciembre de 2015. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/economia/caficultura-sera-clave-posconflicto-colombiano-articulo-531738>. [1 de febrero de 2015].

Con histórica sentencia afros recuperan su territorio en Timbiquí, Cauca. *Verdad Abierta*, 6 de julio de 2015. Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5870-con-historica-sentencia-afros-recuperan-su-territorio-en-timbiqui-cauca>. [6 de julio de 2015].

Contra la pobreza, el mejor café. *El País*, 7 de diciembre de 2014.

Corporación VallenPaz sembró sueños en el Cauca. *El País*, 12 de octubre de 2013. Disponible en: <<http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/corporacion-vallenpaz-sembro-suenos-cauca>>. [30 de julio de 2015].

¿Cuál Debería Ser el Papel de la Empresa Privada en Escenarios de Posconflicto? *Universidad de los Andes*, 28 de marzo de 2014. Disponible en: <<http://agronegocios.uniandes.edu.co/index.php/tematicas/gestionytterritorio/159-cual-deberia-ser-el-papel-de-la-empresa-privada-en-escenarios-de-posconflicto>>. [15 de julio de 2015].

Empresarios: ¿Qué harán para contribuir a la paz? *Revista Semana*, 27 de marzo de 2014. Disponible en: <<http://www.semana.com/nacion/articulo/postconflicto-santos-pregunta-empresarios-sobre-su-rol/381727-3>>. [15 de julio de 2015].

Familias impactadas por obras de doble calzada venderán en Cali sus productos. *Las 2 Orillas*, 12 de febrero de 2015. Disponible en: <<http://www.las2orillas.co/familias-impactadas-por-obras-de-doble-calzada-venderan-en-cali-sus-productos/>>. [30 de julio de 2015].

La Misión Rural y la Misión Cafetera. *Revista Semana*, 25 de octubre de 2014. Disponible en: <<http://www.semana.com/economia/articulo/la-mision-rural-la-mision-cafetera/407007-3>>. [25 de octubre de 2014].

La paz se siembra en el campo, ese sector es prioridad: Santos. *El Tiempo*, 13 de diciembre de 2014. Disponible en: <<http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-dice-que-la-paz-se-siembra-en-el-campo/14971296>>. [1 de febrero de 2015].

Plan de Reparación Colectiva: Unidos reconstruiremos vidas- Corregimiento El Salado. *Organización Internacional para las Migraciones*. Disponible en: <http://www.oim.org.co/component/docman/doc_download/427-proceso-de-reparacion-colectiva-comunidad-el-salado-bolivar.html?Itemid=>>. [15 de julio de 2015].

© Copyright Karen Tatiana Álvarez Riascos, 2016.

© Copyright *GeoGraphos*, 2016.



GIECRYAL
GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE
ESTUDIOS CRÍTICOS Y DE AMÉRICA LATINA